

Sra. Secretaria General:

Examinado el recurso interpuesto el día 1 de agosto de 2017 por la Sección Sindical del Sindicato CSI-F en la Universidad de Cádiz y con fundamento en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de fecha 19 de julio de 2017, se aprobaron las bases de la convocatoria del proceso selectivo para cubrir por turno libre una plaza de Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia y la Investigación en el Área de Investigación y Transferencia, mediante contrato laboral de interinidad por plaza vacante. En el BOUCA nº 235 de 28 de julio de 2017, se convoca la citada plaza

Segundo.- Con fecha 1 de agosto de 2017 la Sección Sindical del Sindicato CSI-F en la Universidad de Cádiz presenta recurso potestativo de reposición, realizando las alegaciones que mejor considera a su derecho, así como solicitando la paralización cautelar del procedimiento.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Constitución Española; Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Estatutos de la Universidad de Cádiz; IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Andaluzas y demás normas de eficaz y pertinente aplicación.

Segundo.- La entidad recurrente manifiesta la falta de concreción en las bases de la convocatoria, del tipo y número de ejercicios en que consiste el proceso selectivo. Sin embargo, reconoce en el hecho segundo, que sí se determina el número de ejercicios de los que consta la fase de oposición, así como la naturaleza de los mismos: uno teórico y otro práctico.

Del mismo modo, afirma la falta de determinación del desarrollo de las pruebas de cada uno de los ejercicios, y no puede tener acogida este motivo, ya que está determinado con antelación (teórica o práctica), así como la puntuación máxima del ejercicio a realizar y la puntuación mínima que debe alcanzar cada candidato para poder superarlos. A mayor abundamiento, el recurrente no argumenta la supuesta influencia de la falta de concreción del desarrollo de las pruebas en la esfera de los derechos o intereses legítimos de los participantes en el proceso selectivo. Influencia que tampoco sería determinante de un reproche invalidante

del proceso, toda vez que la objetividad y racionalidad del mismo se desprende del temario de la convocatoria y de la necesaria adecuación de la fase de oposición a dicho temario; como se establece en el Anexo III de sus bases.

Igualmente, la afirmación realizada por la recurrente de atribución de funciones normativas al Tribunal Calificador por la regulación del apartado A) del Anexo III de las bases de convocatoria, no puede tener acogida, ya que la concreción de los ejercicios en un formato tipo test o en preguntas a desarrollar (para el caso del primer ejercicio), no puede considerarse de naturaleza normativa, sino una concreción de su carácter teórico con relación al temario establecido por quien está facultado para ello, el Tribunal.

Tercero.- El cuanto a la apreciación de los criterios de mérito y capacidad, el temario establecido en la fase de oposición y los méritos a valorar en la fase de concurso, que entendemos acordes y proporcionados, son los que deben ser tenidos en cuenta para la valoración de la convocatoria. Correspondiendo al Tribunal Calificador su aplicación a cada uno de los candidatos presentados.

En el recurso se afirma el incumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, ocasionando indefensión a los participantes en el proceso selectivo. No obstante, como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, la fase de oposición determina con total claridad el número de ejercicios que componen la misma, el temario sobre el que se concretará, así como los criterios de evaluación que rigen para la totalidad del proceso selectivo, correspondiendo al Tribunal Calificador su valoración, por lo que debemos desestimar también la afirmación de existencia de indefensión para los participantes.

Cuarto.- No existe la incompatibilidad denunciada entre esta convocatoria y otra anterior de plaza de Técnico de Grado Medio de Apoyo a la Docencia y la Investigación, personal fijo. Es suficiente examinar el temario de una y otra convocatoria para comprobar que no es el mismo, que se trata de plazas con distinto perfil, por no hablar de los méritos a valorar, distintos igualmente en una y otra convocatoria. Pero es que si lo anterior no fuera suficiente para descartar la supuesta incompatibilidad, ésta se justifica en el recurso en un hecho futuro e incierto, no actual, *“si se dan las condiciones para cubrir necesidades similares a la plaza convocada, habría una bolsa...”*. Sin embargo, como no puede ser de otra manera, la valoración de la oportunidad de la confección de la bolsa corresponde a la Universidad teniendo en cuenta la situación existente al término del proceso selectivo, así como el cumplimiento de los presupuestos fácticos y jurídicos concurrentes en ese momento. Por tanto, el motivo tampoco puede ser atendido.

Quinto.- Se manifiesta finalmente en el recurso la existencia de nulidad de la convocatoria por incumplimiento de lo establecido en el artículo 60.3 del vigente Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), al considerar que la base 5.1 c) sobre composición del Tribunal contraviene dicho precepto. Sin embargo, si analizamos el mencionado artículo 60.3, vemos que el nombramiento por el Rector de dos de los miembros del Tribunal Calificador a propuesta del Comité de Empresa no contradice la regulación del artículo, ya que el legislador deja claro que la pertenencia a los órganos de selección tendrá que ser a título individual, sin que pueda

ostentarse en representación o por cuenta de un tercero, cualidad que se cumple en el nombramiento que se realiza de dos miembros que se proponen por el Comité de Empresa, puesto que la norma lo que impide es la actuación en el Tribunal Calificador como representante del órgano unitario, no impide que no pueda ser nombrado por el Rector a propuesta del mismo, siempre que su actuación lo sea a título individual. Los citados miembros no son nombrados en representación o por cuenta del Comité de Empresa, ni podrán defender o proponer cuestiones en su nombre. Es decir, su única relación con el Comité de Empresa es haber sido propuestos por el órgano unitario de representación de los trabajadores.

Por todo ello, el Letrado que suscribe eleva al Consejo de Gobierno propuesta de **DESESTIMACIÓN** del recurso de reposición interpuesto por la Sección Sindical del Sindicato CSI-F en la Universidad de Cádiz contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de fecha 19 de julio de 2017, por el que se aprobaron las bases de la convocatoria del proceso selectivo para cubrir por turno libre una plaza de Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia y la Investigación en el Área de Investigación y Transferencia, mediante contrato laboral de interinidad por plaza vacante y, consecuentemente, también el levantamiento de la suspensión de la convocatoria.

Es cuanto he tenido el honor de informar.

EL LETRADO-JEFE DEL GABINETE JURÍDICO